

## COMUNIDAD VALENCIANA

## Barberá niega las anomalías urbanísticas que investiga la UE

EL PAÍS, Valencia

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reaccionó ayer ante la amenaza de la Comisión Europea de llevar a los tribunales las irregularidades de la empresa pública Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA), junto al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Según el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreedy, AUMSA y el IVVSA crearon sociedades mixtas con accionistas privados, como Cabanyal 2010, a los que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público violando las directivas europeas sobre contratación pública.

Mientras que el Consell espera a tener una comunicación oficial sobre el dictamen de la CE, que requiere información en un plazo de dos meses antes de llevar el asunto al Tribunal de la Unión Europea, la alcaldesa de Valencia aseguró ayer que la sociedad Cabanyal 2010, creada para llevar a cabo la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez con empresas privadas que luego la dejaron por la crisis urbanística, "todavía no ha adjudicado ni una sola obra" y "menos, a los que antes eran sus miembros".

Barberá afirmó, en ese sentido, que "por tanto, no hay nada que temer" y señaló que esta entidad "no ha cometido ninguna irregularidad" o "falta de adecuación a las exigencias de la Unión Europea nunca". La alcaldesa manifestó que el Ayuntamiento de Valencia no ha recibido ninguna notificación y que desconoce el contenido del dictamen. La Unión Europea se dirige a los estados, que es con los que tiene la interlocución. Según comentó, el Ayuntamiento remitió un informe de AUMSA a la Unión Europea pero "nunca ha sabido nada más". Asimismo, añadió que ya no existe la sociedad mixta porque ahora la entidad la conforman únicamente dos empresas públicas.

Por su parte, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una regulación urbanística "intachable" que acabe con el caos y acusó al jefe del Consell de convertir a la Comunidad Valenciana en "el paraíso de las contrataciones a dedo y el urbanismo descontrolado". En un comunicado, el portavoz parlamentario de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Francesc Signes, culpó a Camps de "hundir a la Comunidad Valenciana en el caos del ladrillo". Signes anunció que en el Debate de Política General el PSPV exigirá a Camps que establezca un marco legal claro y riguroso para el urbanismo y la construcción.

## Camps y el presidente del TSJ hacen alarde en público de su complicidad

Sánchez de León reclama una justicia rápida y con los medios necesarios

EL PAÍS  
Valencia

La toma de posesión de la nueva consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, sirvió para poner de manifiesto las relaciones de amistad y complicidad existentes entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa. Un Camps expansivo afirmó: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".

Más discreto, tal vez por aquello de guardar las formas y porque la división de poderes todavía existe aunque sea en el plano teórico, el presidente del TSJ, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse "feliz con esa excelente relación" que ha permitido una "colaboración perfecta" en la "lucha" para reclamar más órganos judiciales.

La nueva consejera, que juró su cargo en valenciano, pese a que raramente lo utiliza, reclamó en sus primeras declaraciones "una justicia rápida, con los instrumentos adecuados" como la mejor garantía para defender los derechos de los ciudadanos. Sánchez de León cree que este objetivo debe ser "la apuesta más eficaz" que pueda hacer el Consell en la que es su nueva responsabilidad. El presidente Camps subrayó que la nueva miembro de su gobierno estaba en "las mejores condiciones para continuar con la modernización de la Justicia".

Por otra parte, el pleno del Consell aprobó ayer la remodelación de la Consejería de Bienestar que Camps había anunciado el jueves. Los cambios, que buscan hacer frente a los problemas que surgen de la aplicación de la Ley de Dependencia consistieron en el nombramiento de Joaquín Martínez como secretario autonómico de Autonomía personal y Dependencia, mientras que David Calatayud se hará cargo de otra secretaría autonómica, la Familia y Coordinación Social.



Sánchez de León, ayer, con De Rosa y el vicepresidente Rambla, en la toma de posesión del cargo. / CARLES FRANCESC

En la consejería de Presidencia, Rafael Ripoll acumula a sus anteriores responsabilidades la de Cohesión Territorial, dejada vacante por Sánchez de León. En la referencia del pleno del Consell, el vicepresidente Vicente Rambla explicó que el hecho de que los valencianos puedan

ver TV3 en analógico depende del Gobierno. Según Rambla, La reciprocidad de emisiones entre Canal 9 y la televisión pública catalana está pendiente de un decreto del Ministerio de Industria, que debe autorizar un tercer multiplex —banda con cuatro canales de TDT (televisión digital terrestre)— para que ambas comunidades autónomas puedan intercambiar sus señales de televisión. Las relaciones con el gobierno catalán son "buenas", dijo el portavoz descartando que el retraso se deba a una falta de entendimiento entre ambas administraciones. El trámite lleva parado desde hace meses.

Rambla consideró que con esta tercera banda se podrá normalizar la emisión de ambas te-

levisión pública, si bien Canal 9 se ve desde este verano en el área metropolitana de Barcelona. La Comunidad Valenciana dispone en este momento de un multiplex en funcionamiento, con dos canales ocupados por RTVV y otros dos adjudicados a televisiones privadas.

El segundo multiplex, ya autorizado por el ministerio, reserva otros dos canales para el ente público —uno de ellos para un canal autonómico de 24 horas—, mientras los dos restantes se adjudicarán a televisiones privadas. El tercer multiplex se dedicará a los acuerdos de reciprocidad con televisiones públicas de comunidades vecinas. Desde ahí se emitiría TV3 y probablemente el canal de Murcia.

## La Comunidad Valenciana se mantiene como la más endeudada respecto al PIB

EL PAÍS  
Valencia

La deuda de la Comunidad Valenciana siguió creciendo durante la primera mitad del año. Si a final de 2007 se elevaba a 11.550 millones de euros y representaba un 11,3% del Producto Interior Bruto (PIB) del territorio, en junio pasado alcanzó los 11.961 millones, y avanzó hasta el 11,4% del PIB, según los datos difundidos ayer por el Banco de España.

Esas cifras consolidan a la autonomía como la más endeudada en relación a su PIB. En Cataluña y Baleares, que comparten la segunda posición, representa el 8,8%. En números absolutos la Comunidad Valenciana sólo es superada por Cataluña, cuya

deuda se disparó hasta los 17.808 millones de euros.

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada, celebró el único aspecto positivo de los datos: el crecimiento inte-

El endeudamiento crece un 7% en un año, un 1% menos que la media estatal

ranual de la deuda ha sido en 2008 el menor desde 1996, al haber crecido un 7% entre junio de 2007 y junio pasado. Un año antes lo hizo un 8%. Y el anterior, un 10,1%. Una evolución, prosi-

guió, que contrasta con el conjunto de comunidades, que han visto crecer su deuda un 9% en un año. Pérez Boada comparó el caso valenciano con el de tres territorios gobernados por los socialistas: Baleares (donde se incrementó un 27,48%), Cataluña (un 22,5%), y Castilla-La Mancha (un 16,34%). El crecimiento entre el primer y el segundo trimestre del año, añadió el director del IVF, fue en la Comunidad Valenciana de un 2,79%, mientras la media de comunidades se elevaba hasta el 4,4%.

Una lectura distinta ofrecieron los socialistas, que pusieron de ejemplo la deuda que la Generalitat tiene contraída con las diputaciones provinciales valencianas. La diputada socialista Cristina Moreno y el portavoz

de la corporación provincial, Rafael Rubio, denunciaron que según la cuenta general de 2007 de la Diputación en Valencia, la Generalitat tenía una deuda total de casi 12 millones de euros y a fecha de hoy sigue debiéndole nueve, "el 76%". "Es un auténtico descontrol y desgobierno", dijeron en alusión a la gestión del PP. Tanto Rubio como Moreno exigieron al Partido Popular que aclare su postura sobre financiación autonómica y local.

Pérez Boada apuntó por último que, "a pesar de que constantemente se acusa al Consell de centrifugar la deuda de la comunidad a través de las empresas públicas", en términos interanuales su deuda ha crecido un 5,9%, el tercer mejor comportamiento de España.